

Iglesia y movimientos sociales en México: 1972-1987

Víctor Gabriel Muro González

LA RECIENTE acción política de la Iglesia católica ha entroncado con una intensa movilización de diferentes grupos sociales en México desde hace más de dos décadas. En varios casos, el resultado ha sido una decidida participación de la Iglesia en los procesos de movilización y el desarrollo de organizaciones con una acción política relevante.

Desde principios de los años setenta este fenómeno ha sucedido con frecuencia en un marco regional, como producto de conflictos sociales de gran magnitud. Las zonas de las diócesis de Cuernavaca, San Cristóbal Las Casas, Hermosillo, Tehuantepec, Chihuahua y Ciudad Juárez, entre otras, han sido escenarios donde la Iglesia local se ha destacado como uno de los actores sociales centrales en los conflictos. Los movimientos ahí generados han presentado un nivel de organización y expresión política contestataria de mucha consistencia, no sólo por la cantidad de sus miembros participantes, sino también por la articulación ideológica que han tenido y los logros alcanzados durante su desenvolvimiento.

El fenómeno es novedoso por dos razones. La primera, porque desde la terminación definitiva del conflicto religioso (1917-1940), el personal eclesiástico había procurado evitar una postura política explícita frente a las acciones estatales. La segunda, porque en este caso, ha fluido un discurso religioso en la acción política de los actores sociales y se han ligado a la Iglesia, por su pertenencia o por su conveniencia, lo cual ha suscitado una actitud para imponer cambios en el orden social. De este modo han influido considerablemente en el aglutinamiento de vastos sectores de la sociedad civil donde tiene lugar la movilización.

Este significativo fenómeno nos ha motivado a preguntarnos a qué se debe la nueva postura política de la Iglesia y cómo ha sido su relación con los movimientos sociales contemporáneos en este país. Pretendemos en el presente escrito esbozar algunos elementos de dicho proceso.¹

La proposición principal de este trabajo es que la transformación de la Iglesia católica mexicana en agente activo de varios de los movimientos sociales recientes se debe primordialmente a su necesidad para responder adecuadamente a los cambios actuales de la sociedad civil. En otras palabras, la Iglesia, como una institución bien integrada dentro de la sociedad civil, se ajusta a la dinámica de ésta y evalúa positivamente su intervención en los procesos sociales para mantener o incrementar su legitimidad en los ámbitos sociales donde se desenvuele de manera particular.

Para sustentar tal proposición examinaremos el desarrollo social de la Iglesia en el contexto sociopolítico nacional, y posteriormente abordaremos sucintamente los casos de Ciudad Juárez y el Istmo de Tehuantepec, lugares donde se ha observado especialmente nuestro fenómeno de estudio.

En ambos espacios regionales, se trata de mostrar la existencia de una correlación entre una significativa mutación de la sociedad civil y una postura política opositora de la Iglesia. El cambio se percibe por la modificación de estructuras sociales² y el surgimiento de nuevas orientaciones, prácticas y demandas políticas y sociales frente al Estado. La acción eclesiástica opositora se observa, a través del discurso pastoral, en los constantes llamamientos a los miembros de la institución para actuar en la transformación de la realidad social y en la participación de las organizaciones eclesiásticas para promover la movilización o hacerla más eficaz.

Al analizar aquí la metamorfosis de conjuntos de individuos en actores sociales, los movimientos sociales quedan definidos como el despliegue duradero y consistente de varios sectores de la sociedad civil que presentan demandas de cambio en un extenso espacio social, con arreglo a las orientaciones políticas y culturales de los actores en acción. Como los movimientos sociales están ligados a procesos, significan la posibilidad de cambio. Y frente al cambio, las instituciones sociales se ligan a los movimientos o tratarán de

¹ Actualmente [1989] nos encontramos en la etapa final de la investigación.

² Entendemos como estructuras sociales, las situaciones que se reproducen regularmente durante un largo tiempo en un espacio social amplio. En este caso, sobresale la estructura productiva y los patrones culturales.

desarticularlos, dependiendo de su posición frente a la sociedad civil y el Estado.

Por ello, la Iglesia (como institución social) tiende a definirse políticamente ante los conflictos sociales, de acuerdo con el peso de los sectores participantes en el proceso: si éstos desempeñan un papel importante, la Iglesia se les adherirá.

La Iglesia y el desarrollo social del país

Después de la guerra cristera (1926-1929), con “los arreglos del 29”, la Iglesia se vio impelida a aceptar su nueva situación. Ya no podía luchar contra el Estado para recuperar sus antiguos privilegios y debía reconocer su marginalidad frente a una sociedad en proceso de modernización. En consecuencia, postula el objetivo de mantener vigente su doctrina y su supremacía (como institución normativa) en todos los ámbitos sociales. Para lograrlo, debía iniciar una serie de adaptaciones difíciles, pero fructíferas, en poco más de una década.

Con esta intención, la Iglesia va dejando de lado sus modos tradicionales en sus relaciones sociales, una de cuyas características principales era la utilización de mecanismos de poder para controlar voluntades y conductas. A partir de entonces, se desenvuelve más como una institución inserta en la sociedad civil y no ligada al ámbito estatal.³

Esta variación suponía la renuncia de la Iglesia a ejercer un poder material similar al del Estado. La institución mostraba esta actitud no sólo porque el desarrollo de la Iglesia universal así lo exigía, pues el papado instruía de manera especial a la jerarquía mexicana sobre la necesidad de cambiar en ese tiempo, sino también porque la Iglesia ya percibía las nuevas condiciones de la sociedad mexicana. Esto puede observarse en tres momentos del desarrollo de la Iglesia: 1) después de “los arreglos”, en medio de la imposición de un nuevo orden social; 2) cuando activa políticamente a diferentes grupos de laicos para contrarrestar la acción estatal en el culto religioso, la educación y la economía, principalmente du-

³ A pesar de que las constituciones de 1857 y de 1917 habían establecido la supresión de mecanismos de presión de la Iglesia para mantener el control de individuos, en la realidad las disposiciones constitucionales sólo se aplicaban parcialmente, sobre todo durante la época porfiriana, y aún la Iglesia insistía en dominar espacios que el Estado ya había ocupado.

rante el cardenismo, y 3) en el momento en que da su apoyo institucional a los regímenes políticos a partir de 1940.

Sobre el primer momento, Ralph Beals (1966) nos muestra el modo de adaptación de la Iglesia en este tiempo: relaciona los cambios de las condiciones sociales en la acción eclesiástica; apunta que la modificación de la Iglesia respondía a las nuevas formas de la vida social y política de México, porque había un desajuste cada vez más notable entre las pautas de comportamiento religioso y las relaciones sociales, por el impulso a la secularización de los primeros regímenes posrevolucionarios.

El primer momento es analizado prolijamente por Ralph Beals (1966), quien establece que el modo de adaptación de la Iglesia en este tiempo está relacionado con los cambios en las condiciones sociales, es decir, la modificación radical del papel de la Iglesia respondía a las nuevas formas de la vida social y política de México, que paulatinamente se desligaba de las normas eclesiásticas.

Beals se centra en el cambio de liderazgo de la Iglesia, el cual ocurre, en primer término, por la nueva orientación del papado (hacia la modernidad) y por la necesidad de concentrar el poder dentro del episcopado, para potenciarlo como el máximo organismo eclesial, con el fin de llevar a cabo la tarea de “re Cristianizar” a la sociedad mexicana, pues había devenido “sociedad pagana”. Frente a esta situación, la Iglesia condena las leyes gubernamentales, por su carácter licencioso, pero acepta su legitimidad. La re Cristianización implicaba inconformidad con el programa gubernamental, pero en modo alguno conducía a la demanda de recuperación de los privilegios de la Iglesia (*ibid.*: 76 y ss.).

El segundo momento ocurre durante el régimen del presidente Lázaro Cárdenas. Aunque la institución eclesiástica había dado muestras de dedicarse únicamente a su reorganización y a actividades espirituales inmediatamente después de los arreglos, los desacuerdos entre las facciones estatales reactivaron el conflicto tomando medidas anticlericales, como la reducción de sacerdotes, la incautación de los templos y el establecimiento de la educación socialista (Negrete, 1988:75 y ss.).

Aunque posteriormente el régimen de Cárdenas se mostrara más tolerante y conciliatorio con la Iglesia —permitió el libre ejercicio sacerdotal y entregó los templos a la Iglesia—, la educación socialista, la reforma agraria y las expropiaciones provocaron una reorganización política más vigorosa de sectores vinculados a la Iglesia.

Ante las acciones estatales, que habían cooptado amplios sectores populares, surgen dos organizaciones cívico-políticas, cuya base

es la Acción Católica, que demandan el establecimiento de un orden social cristiano. Ante la adversidad a la que se enfrentaba la Iglesia, se concibe la necesidad de crear un campo de acción donde los laicos ejercieran una militancia capaz de contrarrestar los efectos de la nueva política gubernamental, sin afectar el *modus vivendi*.

Esa militancia laica se desarrolló especialmente en la última fase del cardenismo. Si bien la Iglesia había reconocido la legitimidad del régimen, ya había activado sus cuadros para presionar al Estado. Éstos llegan a expresarse en una acción política más definida con el sinarquismo y el panismo.

Aunque ambos grupos guardaban estrecha relación con el clero, y nacen para combatir la secularización emprendida por el régimen, tenían concepciones sociales diferentes: el sinarquismo era un movimiento surgido de un medio campesino, que intentaba reagrupar a los excombatientes cristeros para emprender una lucha política que condujera a una sociedad constituida por comunidades; en cambio, el panismo es heredero de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, organización de sectores sociales urbanos medios y altos, que actuaba cívicamente contra el Estado, agrupaba a diversos grupos católicos y tenía un proyecto político capitalista (Olivera, 1976:300-301).

El sinarquismo aparece como una organización política con un ideal cristiano. Cumple dos propósitos importantes: organizar actos masivos y evitar los levantamientos armados entre los campesinos. Su desarrollo en un principio es vertiginoso, de tal modo que legó a reunir a más de medio millón de militantes en el centro y occidente del país (Meyer, 1979:44).

A pesar de toda la fuerza política que concentró, el sinarquismo fue manipulable, por su ingenuidad y entrega. Fue utilizado por la jerarquía eclesiástica en sus negociaciones con el Estado, y por el régimen de Ávila Camacho para debilitar el ala izquierda del partido en el poder y para ganar el apoyo de los sinarquistas (*ibid.*: 203).

Esto representaba el signo del cambio: el viraje político de Ávila Camacho desde su inicio en 1940 y la liquidación del conflicto religioso hacían innecesaria la participación política de los cuadros eclesiásticos. La jerarquía finiquita sus relaciones con el sinarquismo cuando ya no es necesario para presionar al Estado.

El panismo se desenvuelve en circunstancias parecidas. Fundado en 1939, predominantemente por jóvenes católicos universitarios, el Partido Acción Nacional (PAN) tenía como objetivo inmediato impedir la continuidad de la política cardenista en el siguiente régimen presidencial. Los fundadores habían participado en el con-

flicto Iglesia-Estado dentro de la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa; entre ellos había desde intelectuales hasta empresarios, quienes estaban motivados por su religiosidad e interesados en la sobrevivencia de los valores católicos frente a la creciente secularización, aunque también actuaban para defender sus intereses económicos (Mabry, 1973:16).

El PAN obtiene resultados positivos en el crecimiento de su organización, en buena medida por la crisis del final del cardenismo: la fuga de capitales, la desconfianza de la comunidad financiera, la desilusión de los estratos medios, las malas condiciones económicas de algunas empresas estatales, etc. (*ibid.*: 36).

La Iglesia, sin embargo, cuando se aviene con el Estado marca un distanciamiento entre las estructuras eclesíásticas y el PAN, el cual también pierde fuerza, entre otras razones, porque el proyecto económico avilicamachista satisface sus demandas. Pero queda mucho mejor establecido que el sinarquismo.

En estas circunstancias, la Iglesia abandona todo tipo de discurso político y corta sus ligas formales con organizaciones laicas cívicas. Con el liderazgo del nuevo arzobispo de México en ese tiempo, Luis María Martínez, se insiste en el apoliticismo de la institución. Su discurso sostenía la creencia en la fuerza revolucionaria del Evangelio para transformar la sociedad: había que establecer el Reino de Dios, y para ello se requería militancia, organización y disciplina de los laicos. El transfondo era el logro de un cambio espiritual, no material, de la sociedad (Beals, 1966:78). Con este cambio, la Iglesia queda nuevamente bien integrada dentro de la sociedad civil.

Justamente en el tercer momento comienza una intensa expansión de la Iglesia. El conflicto religioso había afectado considerablemente la estructura eclesíástica, por la expulsión de gran parte del personal eclesíástico y por el cierre de centros de formación, pero una vez terminada esa etapa, es sorprendentemente intenso el crecimiento de la Iglesia, especialmente en las décadas de los cuarenta y cincuenta.

En esta época se inicia el cooperativismo de promoción social, los centros sociales, los centros de capacitación técnica, el incipiente sindicalismo independiente, la Juventud Obrera Católica (JOC). Posteriormente llegaron nuevas organizaciones que renovarían la atmósfera eclesial en los estratos medios y altos: los Cursillos de Cristiandad, el Movimiento Familiar Cristiano y el Opus Dei.

El fortalecimiento de la Iglesia en su estructura y la profunda influencia que logró en la sociedad civil en parte eran producto del

mutuo apoyo que se brindaban el Estado y la Iglesia (Loeza, 1985). La estabilidad política y el crecimiento económico, logrados desde el decenio de los cuarenta, habían menguado considerablemente las fuentes de conflictividad social en el país.

La ausencia de una oposición política sólida y continua al régimen contribuyó a que la Iglesia no se viera precisada a tomar posturas ante cualquier situación de cuestionamiento al Estado. Prueba de ello es que a pesar de que el PAN intentaba imponer los postulados de la doctrina social de la Iglesia, la jerarquía católica procuraba mantenerse al margen de dicho partido, al menos públicamente.

La preeminencia de la Iglesia y, por tanto, la falta de pluralidad de organizaciones políticas y religiosas, hicieron innecesaria la creación de un partido demócrata cristiano, como apunta Iván Vallier (1970). En efecto, en otros países, donde la Iglesia y el Estado se enfrentaban a fuertes corrientes políticas de izquierda, la formación de la democracia cristiana tenía como objetivo central contrarrestar la influencia de tales corrientes, mediante posturas reformistas.

Vallier, de igual manera, establece una relación entre el comportamiento conservador de la Iglesia y factores particulares de México: la no existencia de un sector industrial relativamente grande que pudiera generar fuertes grupos organizados políticamente, que preconizaran o favorecieran políticas nacionales de cambio (en este caso los sindicatos obreros han padecido un control político riguroso que impidió una proyección hacia el cambio social); los grupos marginados y de campesinos pobres, que están fuera del sistema político y no participan de la vida central de la Iglesia, y la ausencia de respaldo a una conciencia social que combine principios o símbolos de cambio y valores humanos universales (*ibid.*: 214).

En otras palabras, la preeminencia de la Iglesia se logró no sólo porque mantenía relaciones armónicas con el Estado, sino también porque no encontraba corrientes sociales que la cuestionaran. La lespolitización y el control estatal fueron entonces elementos favorables a la influencia de la Iglesia en todos los ámbitos sociales.

De este modo, dicha influencia en la sociedad se caracterizó por filtrar una orientación política conservadora, en términos de oposición a cualquier ideología socializante y liberal. De ahí que la Iglesia, muy estrechamente con sus organizaciones laicas, mantuviera atente una movilización masiva frente a cualquier intento de cambio.

Lo anterior se puso de manifiesto cuando el régimen del presidente López Mateos a principios de los años sesenta asumió postu-

ras políticas de izquierda, sobre todo el apoyo a la Revolución Cubana y la creación de los libros de texto gratuitos con un contenido social liberal. Si bien los sectores empresariales fueron la punta de lanza contra esas medidas, la Iglesia se encargó de movilizar todos sus cuadros en todos los niveles sociales para hacer retroceder al gobierno (Gálvez, 1985 y Loaeza, 1988).

Si bien la Iglesia desplegaba esta acción conservadora con efectividad, no era exclusivamente porque sólo era una orientación de su estructura jerárquica: había asimismo una correspondencia con todo el ámbito social, donde las clases medias constituían un sustrato ideológico para el orden social, puesto que estaban en pleno ascenso. Es muy significativo que en el campo político no hayan prosperado movimientos de oposición con un peso específico frente al poder estatal. Más bien había una tendencia a reforzar el sistema político y el modelo de desarrollo del país.

Sin embargo, la rigidez ideológica de la Iglesia —cuya expresión más popularizada durante la primera mitad de los años sesenta fue “cristianismo sí, comunismo no”— empezó a modificarse. Tal vez los factores más importantes fueron la disminución de sus bases sociales y el recambio de sus organizaciones.

En efecto, la principal organización eclesial, Acción Católica, entró en crisis. Su inercia religiosa y su posición conservadora ante los nuevos problemas sociales la hicieron ineficaz para el reclutamiento de nuevos miembros y la cohesión de otras organizaciones. Con ello, la gran estructura laical, tan consistente en los años cincuenta, comenzó a perder fuerza en la década siguiente. Nuevas organizaciones reagruparon a los laicos intentando cambios en el apostolado, como el Movimiento Familiar Cristiano, Jornadas de Vida Cristiana, Cursillos de Cristiandad, Movimiento para un Mundo Mejor, etc. Todo esto en el contexto del Concilio Vaticano II (1962-1965), cuyo propósito era la “puesta al día” de la Iglesia.

Con el impulso renovador, se crearon nuevas organizaciones eclesiásticas a fin de imponer los cambios demandados por el Concilio. Una de las principales preocupaciones originadas en este proceso fue la de transmitir una conciencia crítica para la superación de los problemas sociales. Pero tuvo como principal obstáculo la inflexibilidad de la estructura clerical.

La nueva conciencia eclesial adquirió aun más fuerza con el desarrollo del movimiento estudiantil de 1968, y a raíz de este acontecimiento comienzan a ser más fuertes las pugnas dentro de la institución y a proyectarse una protesta de varios sectores eclesiásticos contra el orden social.

A principios de la década de los setenta, la vinculación de estos sectores a grupos políticos disidentes, sobre todo populares, origina los constantes pronunciamientos políticos entre sí. Frente a la realidad social que se vive, cada vez más van asumiendo un carácter antiestatal, según la relación que guardan con los diferentes sectores de la sociedad civil.

Son los procesos de movilización social, por consiguiente, los que someten a la Iglesia a una dinámica de acción política. Los movimientos sociales, al atraer a grandes grupos de la sociedad civil, introducen una conciencia de cambio. Ésta, por una parte, es asimilada por varias porciones de la Iglesia. Por otra, la institución reacciona ante la posibilidad de que dicha conciencia pueda afectar su posición. La integración de la Iglesia a los procesos sociales, por ende, responde ante todo a la salvaguarda de su influencia y legitimidad. Si bien la Iglesia en el país mantiene escasas pautas de movilidad política, en las localidades donde surgen procesos sociales, por lo regular, interviene con mucha fuerza, de acuerdo con el grado de influencia que ejerza. Esto se puede observar en los casos de Ciudad Juárez y el Istmo de Tehuantepec.

Ciudad Juárez

El proceso social actual tiene sus antecedentes en el cambio económico-demográfico y en una notable actividad política de oposición. Respecto al primero, puede señalarse como el elemento más relevante la creación del Programa Nacional de las Fronteras, que comenzó a funcionar en 1965. Ante el intenso tránsito y crecimiento de la población, el Programa tenía los objetivos de atraer más turistas, promover más empleos y elevar el nivel de vida de los fronterizos. Con ello, se mantiene la alta tasa de crecimiento demográfico en Ciudad Juárez: simplemente de 1950 a 1980, la población del municipio creció de 122 566 a 663 094 habitantes, es decir, un promedio anual de 6.5%, y seguramente en la actualidad la población sobrepasa el millón de habitantes.

Con el Programa se incrementó notablemente el número de industrias, principalmente maquiladoras, de tal manera que en 1980 la PEA en el sector secundario era de 29.0%. La modernización y el intenso desarrollo capitalistas afectaron la vida de la población, pues hubo un crecimiento acelerado de la migración interna y externa (por la venta masiva de fuerza de trabajo). La alianza entre la burguesía financiera y el capital externo para establecer indus-

trias maquiladoras dio como resultado la conversión de una economía basada en la agricultura y el turismo a una urbana e industrial. Éste es un factor importante en el reacomodo de las fuerzas democráticas (Valdés, 1986:1), puesto que los patrones de consumo de los chihuahuenses se habían elevado notablemente, y, con la crisis económica reciente, habían sufrido un fuerte deterioro, sobre todo por las devaluaciones del peso, que los motivó a una participación política de oposición.

La nacionalización de la banca en 1982 es el detonante de la movilización social. La crisis ya había hecho reaccionar a los chihuahuenses contra la corrupción gubernamental y el centralismo político, pero a partir de entonces el malestar de empresarios y sectores medios se traduce en la formación de organizaciones civiles que, unidas al Partido Acción Nacional (PAN), lograron aglutinar enormes grupos de población para efectuar grandes movilizaciones. De ahí que el PAN haya ganado las elecciones municipales de 1983 y haya logrado una masiva y enérgica protesta por las irregularidades en las votaciones de los periodos electorales siguientes.

La configuración del movimiento a través de demandas y prácticas sociales, como marchas, plantones, huelgas de hambre, sesiones de oración pública, etc., han llevado al conjunto de los grupos movilizados a cuestionar toda actividad estatal, a promover cambios en la cultura política local y a fortalecer la sociedad civil, de tal modo que el Estado se ha visto obligado a ceder más espacios a la participación ciudadana.

El antecedente político de este proceso es la efervescencia de grupos de izquierda desde la década de los sesenta. En 1972, con la acción de grupos guerrilleros y la formación del Comité de Defensa Popular (constituido por obreros, colonos y estudiantes), llegó a su apogeo el despliegue de esta fuerza antiestatal, sobre todo dentro de los centros de educación superior.

El sector empresarial, preocupado por la fuerza de estos grupos, presiona políticamente y financia organizaciones para contrarrestar su influencia. Así, en 1974, la contraofensiva empresarial y la acción estatal alejan a los grupos izquierdistas de los planteles de educación superior, sus principales centros de operaciones, con su consecuente debilitamiento y aislamiento. De este modo, con la promoción de grandes inversiones en el estado, los grupos empresariales se vuelven política e ideológicamente más influyentes.

La Iglesia empieza a ser pieza clave del proceso desde 1972, cuando intentaba acercarse a los grupos populares. Su preocupación evangelizadora se había incrementado por la fuerte tendencia a la secu-

larización de grandes grupos sociales y por la proliferación de sectas religiosas, especialmente en las zonas urbanas marginadas. Con un discurso propio de la teología de la liberación, los eclesiásticos pretendían tener un mayor ascendiente en los sectores sociales bajos. La proporción de eventos eclesiales y las protestas públicas del obispo Manuel Talamás y su clero contra la represión, la violencia institucionalizada, la injusticia social y la ausencia de democracia en el estado y el país constituyeron las principales medidas para replantar la evangelización de Ciudad Juárez.

Los sectores medios y altos empezaron a ver con desconfianza estas actividades de la Iglesia y a distanciarse de ella porque consideraban que tenía una tendencia política socializante. El alejamiento de estos sectores y de un gran número de jóvenes hicieron recapacitar a la Iglesia. Por tanto, su postura se moderó. Así, la pérdida creciente de legitimidad en grandes ámbitos sociales motivó a la Iglesia a adoptar líneas de acción para evitar a toda costa su segregación.

A partir de 1975 la Iglesia inicia, con nuevas orientaciones, una planificación pastoral a fondo para promover una sólida evangelización. Esto coincide con la proliferación de los grupos carismáticos católicos, promovidos desde Estados Unidos. Aunque en un principio éstos no fueron aceptados dentro de los marcos institucionales, por sus rasgos protestantes y por su tendencia a ser autónomos de las estructuras eclesiásticas, la aceptación que tuvieron entre los sectores medios y altos hizo que la jerarquía los adoptara como organizaciones institucionales, para proyectar con más fuerza su plan de evangelización. Estos grupos fueron el medio para llevarlo a cabo con éxito.

La Iglesia agrupó y coordinó a todas sus organizaciones en el Sistema Integral de Evangelización (Sine), donde tuvieron un peso especial los grupos carismáticos, por su gran dinámica de acción. El Sine devino un instrumento ideal para crear cuadros: llevó una idea de evangelización mucho más integrada a todas las actividades de los evangelizados, especialmente la participación cívica. La formación del Sine implicó una constante concientización para actuar políticamente.

Con la gran cantidad de "pequeñas comunidades" formadas a través del Sine y con la cooptación de líderes de sectores medios y altos, la Iglesia se filtró en muchas esferas de la sociedad civil y proyectó a muchas de las organizaciones constitutivas del movimiento social. Así, desde 1982, la conformación de organizaciones cívicas, posteriormente vinculadas al PAN, fue posible porque se conjugaron los intereses de los grupos sociales hegemónicos y el

descontento generalizado de la población con la actividad integradora de la Iglesia, para incrementar su legitimidad.

De este modo, desde principios de la década de los setenta, por la dinámica de cambio en la estructura social juarensis y por el impulso de adaptación de la Iglesia frente a las mutantes condiciones sociales, se configura el movimiento social que ha transformado a la sociedad civil local.

El Istmo de Tehuantepec

El movimiento social actual en la región tiene su origen en las transformaciones modernizantes de la estructura económica iniciadas en el decenio de los sesenta. Las grandes inversiones estatales ocasionaron un desajuste en una parte de la sociedad istmeña no sólo por la alteración de las actividades productivas, sino también por la afectación de tradiciones culturales de la población (López Monjardín, 1983 y Rubín, 1987).

El impulso modernizador capitalista consistió fundamentalmente en dos acciones: por un lado, la construcción de la presa Benito Juárez. Ésta funcionó como motor de desarrollo de la agricultura comercial y la industria; fue la base de despojo de la tierra y de cambios de patrones de cultivos entre los campesinos de una vasta zona, con el fin de dinamizar la economía de la región. Por otro lado, se fomentó la preparación de cuadros profesionales y técnicos con el establecimiento de planteles de educación técnica y superior, para responder a las futuras necesidades económicas de la zona.

Ambas acciones, en contra de lo previsto, resultaron ser un obstáculo para una acumulación capitalista dinámica y expansiva. La afectación de medios económicos y, por consiguiente, de patrones culturales, hizo reaccionar a grandes grupos sociales contra el modelo capitalista impuesto y contra la estructura de poder vigente en ese momento; el despojo de tierras y el sometimiento a la lógica de las dependencias gubernamentales interventoras motivó la protesta generalizada de campesinos comuneros, y el acceso de jóvenes a instituciones educativas técnicas y superiores fue un elemento relevante para la formación de una conciencia crítica sobre los problemas regionales, la cual impulsó a múltiples organizaciones estudiantiles a participar políticamente en contra del orden social.

Estos dos grupos, los campesinos y los estudiantes, incorporaron en breve tiempo, a principios de la década de los setenta, a sectores masivos de la población para promover y realizar actos pú-

blicos con demandas cada vez más radicales en la región, en el estado y en la capital de la República. La Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), formada a partir de las movilizaciones de 1972 en Juchitán, se convirtió en el centro directriz de las actividades masivas hasta nuestros días, sin que aún se vean fisuras cualitativas en su composición.

La Iglesia en el Istmo se había mantenido con una escasa influencia social hasta la década de los sesenta. Su actividad evangelizadora había sido marginal desde el siglo XVI, de tal modo que sólo el reducido número de clérigos existente no podía mantener un contacto estrecho y frecuente con las comunidades rurales, y su actividad en las ciudades sólo consistía en una asistencia sacramental.

Desde finales de los años sesenta, ante el despliegue de sectas religiosas en la región, la Iglesia intentaba detener la ofensiva protestante y a la vez hacer más firme su presencia. Para ello, incrementó su personal e instrumentó medidas asistenciales entre la población. Sin embargo, los resultados fueron magros: fue en 1972, con la llegada del actual obispo, Arturo Lona, cuando hubo una modificación significativa en la pastoral eclesial: su énfasis consistió en la creación de comunidades cristianas y en la formación de catequistas laicos. Estas medidas quedaban ligadas a un análisis crítico de la realidad social. Conjuntamente el clero empezó a romper vínculos con las clases altas y a filtrarse más en sectores populares.

En este proceso, el acercamiento de la Iglesia a las clases subalternas suponía una comprensión de las condiciones sociopolíticas y de sus causas. Tal comprensión proyectaba a la Iglesia a estrechar ligas con los sectores generados del movimiento social.

Desde 1974, con la participación de la COCEI en las elecciones municipales de Juchitán, el movimiento adquiere una fuerza creciente: con su acción promueve invasiones de tierra, destituye funcionarios públicos, libera presos políticos, organiza y gana huelgas en diversas empresas, entre otros logros.

El movimiento ha sido de tal magnitud que, a diferencia de muchos otros, la intensa represión en su contra ha ocasionado el efecto contrario: ha reforzado sus valores culturales y su ideología, y ha seguido aglutinando a sus bases con la misma fuerza desde su origen.

La Iglesia, con la creación de Comunidades Eclesiales de Base, se ha ido vinculando cada vez más al movimiento y ha ido radicalizando su pastoral. Ya en 1977, en el máximo grado de represión

al movimiento, la Iglesia se articulaba con mayor voluntad al proceso. Así, en su objetivo pastoral de 1978, ésta se proponía la creación de una Iglesia popular cada vez más solidaria con los pobres y más igualitaria entre todos sus miembros, sin importar jerarquías.

En esta perspectiva, las organizaciones eclesiales además de constituir un apoyo importante al movimiento, en muchas ocasiones se han hecho parte de él. También hay un impulso de la Iglesia para promover nuevas organizaciones populares e incorporarlas a la dinámica de la movilización a lo largo de toda la diócesis.

Con el triunfo electoral en Juchitán de COCEI-PSUM, en 1981, el movimiento amplía su cobertura en otras zonas del Istmo. Si bien el ayuntamiento cociesta fue destituido ilegalmente en 1983, no disminuyó el poder de la organización (Prevot-Schapira y Rivière, 1984), pues ha venido mostrando su fuerza en las elecciones federales de 1985 y las municipales de 1986, a pesar de la violencia gubernamental ejercida contra el movimiento.

En este contexto, igualmente la Iglesia ha ido afianzando cada vez más su presencia en la zona. Su promoción de cooperativas, asociaciones de productores, organizaciones populares en colonias urbanas marginadas y su vinculación a todos los procesos de movilización popular, la han convertido en una institución muy influyente en la sociedad istmeña.

También desde principios del decenio de los setenta, ante cambios drásticos en la estructura social local, la Iglesia, al buscar su expansión, se adapta incorporándose al proceso social para desempeñar ahí un papel relevante.

Conclusiones

El proceso social de la Iglesia en México ha estado definido principalmente por su relación con la sociedad civil, en el contexto de la transformación sociopolítica, desde los arreglos de 1929, cuando se vio impelida a adaptarse a las nuevas condiciones que le imponía el Estado.

En los sucesivos años, la acción pastoral de la Iglesia se desarrolló con éxito no sólo por la armonía de sus relaciones con el Estado, sino por la ausencia de conflictos sociales. En la medida en que la política estatal mantuvo su hegemonía sin problemas, en parte por el consenso y en parte por el control político, los componentes de la sociedad civil aceptaban el orden social. Esto terminó con el inicio de conflictos y protestas sociales de la década de los setenta.

Justamente, la proliferación de movimientos sociales es uno de

los indicadores de la crisis de hegemonía del sistema. Esto tiene sus repercusiones en la Iglesia, pues las fuerzas sociales emergentes se manifiestan dentro de la institución, donde las pugnas están a la orden del día. Los conflictos en la Iglesia mexicana provocan dos efectos: 1) diversos sectores eclesiásticos impugnan la actual situación jurídica de la Iglesia y, con ello, esbozan una crítica al Estado, y 2) un buen número de organizaciones y jerarcas católicos se integran a los procesos de movilización social, desde donde demandan cambios de fondo en la política y en la sociedad del país. Los casos de Ciudad Juárez y el Istmo de Tehuantepec ilustran más claramente el fenómeno.

Una comparación entre ambos casos nos muestra que, aunque existe una diferenciación política importante entre sí, hay constantes que nos permiten visualizarlas como parte de un mismo proceso.

El origen de sendos movimientos en un cambio social acelerado es lo que define el carácter participativo de la Iglesia. En Ciudad Juárez, la modernización capitalista posibilita la hegemonía política de sectores empresariales, y la Iglesia se supedita a la concepción social vigente para mantener su influencia en los diferentes ámbitos de la sociedad. Por ello, puede preparar cuadros clave para actuar políticamente cuando tiene lugar la crisis económica a principios de los años ochenta.

En el Istmo, el cambio altera directamente estructuras tradicionales. Tal vez por la intervención estatal autoritaria y la ausencia de una élite política y económicamente eficaz, el movimiento asume un carácter profundamente popular. La intención de la Iglesia de expandirse en la zona la obliga a reflexionar sobre el proceso social y a integrarse a él, para lograr su fin.

En síntesis, la relación entre la Iglesia y los movimientos sociales representa un cambio relevante en la sociedad civil, donde las expresiones políticas de los grupos van siendo cada vez más independientes del Estado y van generando demandas cada vez más globales, y donde la Iglesia, como una institución prominente, actúa con arreglo a estas demandas, no sólo para no perder legitimidad, sino también para formar parte de la dirección de los cambios que se susciten e incrementar su influencia en la sociedad civil.

Recibido en septiembre de 1990.

Correspondencia: Colegio de Michoacán/Martínez de Navarrete núm. 05/C.P. 59690 Zamora, Mich.

Referencias bibliográficas

- Beals, Ralph (1966), *Bureaucratic change in the Mexican Catholic Church: 1926-1959*, Berkeley, University of California.
- Gálvez, Alejandro (1985), "La Iglesia mexicana frente a la política exterior e interior del gobierno de Adolfo López Mateos", en Martín de la Rosa y Charles A. Reilly (coords.), *Religión y política en México*, México, Siglo XXI.
- Loaeza, Soledad (1985), "Notas para el estudio de la Iglesia en el México contemporáneo", en Martín de la Rosa y Charles A. Reilly (coords.), *Religión y política en México*, México, Siglo XXI.
- _____ (1988), *Clases medias y política en México. La querrela escolar, 1959-1963*, México, El Colegio de México.
- López Monjardín, Adriana (1983), "Juchitán, las historias de la discordia", *Cuadernos Políticos*, núm. 38, México, Era, octubre-diciembre.
- Mabry, Donald (1973), *Mexico's Acción Nacional. A catholic alternative to revolution*, Syracuse, Syracuse University Press.
- Meyer, Jean (1979), *El sinarquismo, ¿un fascismo mexicano?*, México, Joaquín Mortiz.
- Negrete, Marta Elena (1988), *Relaciones entre la Iglesia y el Estado en México, 1930-1940*, México, El Colegio de México/Universidad Iberoamericana.
- Olivera, Alicia (1976), "La iglesia en México", en Wilkie (ed.), *Contemporary Mexico*, Los Angeles, The University of California Press.
- Prevot-Schapira, M.F. y H. Rivière D'Are (1986), "Poder y contrapoder en el Istmo de Tehuantepec", en Jorge Padua y Alain Vanneph (coords.), *Poder local, poder regional*, México, El Colegio de México/CEMCA.
- Rubín, Jeffrey (1987), "State policies, leftist oppositions, a municipal election: The case of COCEI in Juchitan", en A. Alvarado (comp.), *Electoral patterns and perspectives in Mexico*, San Diego, Center for US-Mexico Studies.
- Valdés, Guillermina (1986), "Perspectivas políticas en el estado de Chihuahua", El Colegio de la Frontera Norte (mimeo).
- Vallier, Ivan (1970), *Catolicismo, control social y modernización en América Latina*, Buenos Aires, Amorrortu.